



Instituto
IPYPP
Pensamiento y Políticas Públicas

Informe de Coyuntura

Agosto 2024

¿Dolarización o ajuste inflacionario?
El falso debate que nos propone el poder

Equipo de discusión: Claudio Lozano, Jaime Farji, Horacio Fernández, Walter González, Agustina Haimovich, Alejandro López Mieres, Tomás Raffo, Ana Rameri y Pedro Olivera

Informe de Coyuntura

¿Dolarización endógena o ajuste inflacionario?

Agosto 2024

La administración de Milei inició, lo que ellos denominan, la *fase dos* de su programa de gobierno. Anunciada en distintas ocasiones por el ministro de economía Luis Caputo, la presentación se centró en definiciones monetarias, muchas de las cuales venían siendo anticipadas y puestas en marcha desde un comienzo como el traspaso de los pasivos del banco central al Tesoro. Sin embargo, detrás de lo públicamente expresado, es posible entrever que esta nueva fase plantea un frente de conflicto con distintas fracciones de capital entre los que destacamos el tradicional bloque exportador y los acreedores institucionalizados (con el FMI a la cabeza) que defienden el ajuste inflacionario como la salida por excelencia a los recurrentes cuellos de botella del mercado cambiario. El gobierno nacional, sin embargo, recupera la idea de dolarización que lejos de haber sido enterrada vuelve a sobrevolar por las cabezas del mundo financiero en su variante de dolarización endógena.

Repasando lo conocido hasta el momento, esta fase dos del gobierno de Milei se centra en la intervención en el mercado cambiario, la gestión de reservas internacionales y la profundización del ajuste monetario y fiscal para reducir la inflación. Concretamente, los elementos claves son:

- **Intervención en el Mercado Cambiario:** El gobierno ha implementado un mecanismo de intervención en el mercado cambiario paralelo, disfrazado como un objetivo de emisión monetaria cero. Esta intervención implica que el BCRA esteriliza los pesos emitidos al comprar divisas en el mercado financiero (CCL), vendiendo los dólares equivalentes para neutralizar los pesos emitidos.
- **Flexibilización del Pago de Importaciones:** Se ha anunciado también una flexibilización en el pago de importaciones, permitiendo pagar el 50% de las importaciones cada 30 días en lugar del esquema previo del 25%. Esta medida busca reducir la demanda de dólares paralelos por parte de importadores, desviándola hacia el dólar oficial, con el objetivo de disminuir la brecha cambiaria y sostener la baja de la inflación.
- **Reducción a cero el riesgo de emisión monetaria y congelamiento de la base monetaria:** Desde el inicio de su gestión, una de las metas principales ha sido que el BCRA no emita para financiar al Tesoro. Esta medida busca evitar el incremento de la base monetaria que podría derivarse del financiamiento del déficit fiscal. Asimismo, se ha promovido la eliminación de pasivos remunerados del BCRA, como LELIQs y pases pasivos, migrando estos instrumentos a letras del Tesoro (LECAP). Este cambio se operativizó mediante la emisión de LECAPs a tasas superiores -asegura una renta del 4% mensual-, incentivando a los bancos a cambiar su deuda del BCRA por deuda del Tesoro pero bajo la garantía de los denominados PUTs que seguían pesando sobre el banco central. Sin embargo, en las últimas semanas el BCRA ha logrado rescindir el 76% de los PUTs sobre títulos públicos del Tesoro mediante un canje con las entidades financieras. Los PUTs eran opciones que permitían a los bancos vender títulos al BCRA a un precio preestablecido, obligando al

BCRA a emitir para recomprar estos títulos. Al eliminar estos PUTs, se ha eliminado también otra fuente potencial de emisión monetaria.

- Nuevo instrumento de política monetaria a cargo del Tesoro: Se suspendieron las operaciones de pases y la liquidez del sistema financiero ahora se administra a través de la Letra Fiscal de Liquidez (LEFI), emitida por el Tesoro y entregada al BCRA a cambio de otros bonos del Tesoro. Este instrumento, de circulación bilateral entre el banco central y los bancos, transfiere el compromiso de pago al Tesoro, reduciendo así la Base Monetaria Amplia al eliminar pasivos remunerados del BCRA.

De esta manera, la fase vigente del plan económico parecería estar puesta en tres metas claves que están articuladas:

- 1) Reducir la inflación a cero o a un 2% mensual para lo cual evitar la devaluación y controlar la brecha cambiaria es un objetivo de principal orden del gobierno. Nótese entonces que el dogmatismo monetarista sobre la inflación es matizado en la práctica por la atención en torno al valor del dólar. Sin embargo, la decisión oficial de sostener el valor de la moneda extranjera que obliga a la venta de dólares por parte de la autoridad monetaria entra en colisión con la acumulación de reservas y el pago de intereses de deuda.
- 2) Estabilizar la base monetaria en un nivel bajo y, eventualmente, crear las condiciones para una posible dolarización endógena de la economía que, como tal, induce vía la generación de escasez de pesos a la necesidad *remonetizar* la economía con dólares atesoradas por el sector privado. La apuesta del gobierno, tal como lo declaró oportunamente el ministro de economía, es la puesta en circulación de los ahorros en dólares de la clase media así como también lo recuperado por el blanqueo del conjunto de residentes. En definitiva se trata de otorgarle al dólar, no sólo la función casi exclusiva de reserva de valor, sino también la de medio de cambio para un conjunto amplio de operaciones.
- 3) Recuperar reservas para levantar el cepo. El primer paso de “revalorizar” el peso por la vía de *escasearlo* pretende descomprimir la presión sobre el tipo de cambio ante la eventual salida del control de cambios. Para ello, y en el mientras tanto, la acumulación de reservas es otro de los objetivos centrales que se basa en las expectativas sobre los resultados del blanqueo de capitales (el Gobierno espera que el blanqueo de capitales aporte cerca de USD 5.000 millones pero estimaciones más realistas indican que llegaría sólo a USD 2000 millones), la posibilidad de negociar fondos frescos con FMI luego de un eventual triunfo de Trump (probablemente el desembolso que restaba del crédito obtenido durante el gobierno de Macri que serían USD 12.000 millones) y lo que permita atraer el RIGI a más largo plazo. De hecho, el propio FMI en el último *Staff Report* señala que la Argentina debería volver a los mercados de deuda a fines del 2025.

El problema es que no son menores las salidas, por un lado el BOPREAL ha comenzado a pagar intereses (se estima que hasta fin de año insumirá cerca de USD 1.500 millones), por otro lado, la intervención en el mercado de cambios es una prioridad para el control de la inflación. Todas estas son presiones sobre las divisas en un contexto donde el complejo agroexportador resiste a la liquidación de los dólares de la cosecha. De esta

manera, como muestra de buena voluntad hacia los acreedores que miran con preocupación las tenencias en divisas, el gobierno nacional negoció un préstamo REPO a través del depósito en una cuenta en Nueva York de poco más de USD 1.500 millones en bonos para hacer frente a los intereses de los bonos Globales y Bonares. Por el resto de los vencimientos, que totalizan al mes de enero del año que viene USD 5.100 millones, se intenta también otra REPO con el oro enviado a Londres.

Recordemos brevemente el contenido de la *fase uno* para entender el punto de partida de la nueva etapa.

La primera etapa tuvo una meta bien concreta, lograda con éxito, que fue la realización de una enorme transferencia de ingresos desde el trabajo a los propietarios de capital en todas sus formas. Para ellos la fórmula consistió en devaluación y ajuste fiscal dando como resultado la inducción de un contexto recesivo que les permitió resolver varios asuntos: el frente cambiario (aliviando la demanda de dólares para la importación), la desaceleración en la suba de los precios (deprimiendo los ingresos y el mercado interno) y el disciplinamiento social (el desempleo como disciplinante de la disputa gremial y social).

De esta manera, en el siguiente cuadro resumen puede observarse que las grandes mayorías soportaron caídas significativas en sus ingresos mientras un grupo selecto de grandes oligopolios aprovecharon el cambio de precios relativos. Obsérvese también la importancia relativa que asume el sector energético vía aumento de precios de la energía expresados en subas de las tarifas que ya acumulan porcentajes astronómicos. La desregulación del control de precios, como hemos señalado en diversas ocasiones, les permitió la dolarización de los excedentes a través de la remarcación de los precios de los bienes y servicios que se tradujo en un encarecimiento en dólares del costo de vida en contraposición con el bajo nivel histórico del salario valuado en la moneda extranjera.

Perdedores:

La caída del poder adquisitivo de los ingresos de la población desde el primer mes de gobierno de Milei hasta la última información disponible según cada concepto de ingresos fueron las siguientes:

- Salario registrado del sector privado (últ. dato: mayo): -6,6%
- Salario registrado del sector público (últ. dato: mayo): -18,4%
- Salario mínimo vital y móvil (últ. dato: junio): -28,8%
- Ex-Potenciar Trabajo (últ. dato: junio): -52,6%
- Haber mínimo con bono (últ. dato: junio): -1,3%
- Salario No Registrado (últ. dato: 1er trimestre 2024): -24,7%

Los únicos ítems de ingresos que aumentaron en términos reales fueron la AUH y la Tarjeta Alimentar, ambas dirigidas al mismo universo. En conjunto, los hogares titulares vieron expandir el monto de estas prestaciones entre un 43,6% (un hijo) y un 51,7% (tres hijos). No obstante, la información disponible sobre la evolución de ingresos de los hogares de menores recursos verifica una caída real de envergadura. El decil 1 vio descender los ingresos familiares per cápita en un -25% desde el tercer trimestre 2023 mientras los siguientes tres deciles del estrato bajo oscilaron en torno a este número. Es decir, la caída de los ingresos laborales informales o la pérdida de empleo de los únicos titulares cuyas prestaciones crecieron en términos reales, fue más relevante en sus condiciones de vida.

Ganadores:

Según la información provista por los balances contables de las empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las principales empresas de los siguientes sectores obtuvieron importantes ganancias al 1er trimestre de 2024.

- Hidrocarburos: rentabilidad operativa (R.O.), +674% i.a; rentabilidad neta (R.N.), +790% i.a. Empresas: YPF, Pan American Energy y Tecpetrol.
- Productores de Alimentos: R.O., +598%; R.N. +1.331%. Empresas: Arcor, Molinos Río de la Plata y Mastellone Hermanos).
- Bancos: R.O. +825%; R.N. +945%. Empresas: Santander, Macri y BBVA.
- Metalurgia: R.O. +169%; R.N. +498%. Empresas: Ternium y Aluar Aluminio.
- Energía: R.O. +208%; R.N. +5.203%. Empresas: Central Puerto y CT Ensenada Barragán.
- Oleaginoso - cerealero: R.O. +189%; R.N. +4.921%. Empresas: Molinos Agro.
- Laboratorios: R.O., 189%; R.N. +9.851%. Empresas: Laboratorio Richmond.

Si se considera la propiedad del capital vemos que el Grupo Techint de Paolo Rocca posee el control de Tecpetrol, Ternium e incide en la política de la petrolera mayoritariamente estatal YPF, a partir de integrar su directorio, y de su participación en la Secretaría de Energía. Asimismo, Arcor y Mastellone son controladas por la familia Pagani, la familia Mastellone y por Danone de Francia. Por último, Molinos Río de la Plata y Molinos Agro son propiedad de la familia Pérez Companc en forma directa e indirecta a través de Santa Margarita LLC radicada en Delaware.

En definitiva, la primera fase concluye con un rápido y brutal cambio de precios relativos que permite retrasar aún más el salario medio de la economía y reordenar el esquema de negocios y rentabilidades del poder económico local. De hecho, el sello final de la etapa inicial concluye con la aprobación de la denominada “Ley de Bases y Punto de Partida para la libertad de los argentinos” que contiene, entre las diversas desregulaciones, una reforma laboral con el objetivo de legalizar las prácticas flexibilizadoras para la contratación laboral, y un régimen de inversiones (el famoso RIGI) con generosas exenciones tributarias, cambiarias, de todo tipo para los grandes capitales. Hasta aquí, la relación entre el Gobierno Nacional y el bloque de poder ha venido transitando un sendero de armonía que hizo realidad la fórmula anhelada que el sistema político tributario del ajuste moderado no terminaba de concretar o lo hacía a medias: contener el gasto público, pulverizar el salario y sellar el pacto entre caballeros con una escalada represiva que discipline de aquí en adelante la protesta social en las calles.

La Fase Dos: Congelamiento de la regresividad distributiva y disciplinamiento a una fracción del capital

Conviene comenzar realizando una aclaración no menor. Milei nunca fue la expresión política del Poder Económico Local (PEL). Este personaje que hoy nos gobierna tiene un mayor anclaje en la ultraderecha mundial y los actores de peso que la sostienen como el partido republicano de Estados Unidos, la fracción más agresiva del capital financiero internacional como los fondos de inversión¹, las grandes corporaciones petroleras y los gigantes tecnológicos.

¹ Los 500 fondos de inversión más importantes gestionan activos en el mundo equivalentes a 114 mil millones de dólares. Los seis más grandes son estadounidenses y en orden son: BlackRock (USD 8,6 mil

De aquí la importante relación que al comienzo de su carrera Milei tuvo con la Fundación ATLAS². El PEL de la Argentina lo tiene que aceptar como la única alternativa posible una vez agotado el intento de restauración conservadora del PRO.

Como señalamos al comienzo, el objetivo de erradicar la inflación a cualquier costo es el punto innegociable del gobierno lo que conduce -una vez licuados los efectos de la devaluación inaugural- irremediablemente a fricciones con el bloque interno del poder que ha recurrido históricamente a la estrategia del ajuste inflacionario para relanzar los ciclos de negocio.

La dolarización, en cambio, mutila la herramienta de los sectores que dominan la economía para imponer transferencias regresivas sin necesidad de recortes nominales, especialmente en contextos sin crecimiento económico. El proyecto que todavía sostiene Milei, en cambio, requiere defender a rajatabla un tipo de cambio apreciado para configurar una pseudoconvertibilidad que suprime de la política económica la posibilidad de favorecer la competitividad financiera del sector exportador.

La disconformidad con un *dólar atrasado* (como suele repetirse) desde la perspectiva exportadora ya se viene experimentando en los últimos meses con la menor liquidación de la cosecha. Hasta el momento, el remanente no liquidado asciende a aproximadamente a USD 14.000 millones de dólares, un valor que implica situarse en USD 5.000 millones por debajo del 2022. El *dólar blend* tampoco satisface las expectativas de rentabilidad del sector precisamente porque los dólares financieros también están siendo contenidos, situación que se agrava por un panorama de precios internacionales desfavorable.

La confrontación con el agronegocio, actor de peso histórico relevante en la provisión de divisas, también puede entenderse como resultado de las perspectivas acerca de un cambio en el perfil exportador-extractivista de la Argentina. La apuesta por la explotación hidrocarburífera no convencional, la profundización de la extracción de carbonato de litio, cobre y otros minerales estratégicos para la transición energética europea, no representa únicamente una diversificación de la canasta exportadora sino también un cambio en la fisonomía del capitalismo local. No son iguales los actores que dominan la producción agroindustrial que

millones), Vanguard Group (USD 7,2 mil millones), Fidelity Investment (USD 3,7 mil millones), State Street (USD 3,5 mil millones), JP Morgan (USD 2,8 mil millones), Goldman Sachs (USD 2,8 millones), entre otros. Los gestores de fondos en el mundo están reconfigurando el capitalismo llevándolo a una fase monopolística de mayor profundidad. Gestionan sumas equivalentes a la de varias economías y son interlocutores habituales de los gobiernos e instituciones financieras internacionales. Tienen participación en las principales corporaciones de la economía mundial y una fuerte articulación con los proyectos de infraestructura y tecnología. Incluso compiten con funciones a cargo de los estados como la gestión de los fondos de pensión. Milei ha expresado abiertamente el alineamiento respecto a los intereses de Larry Fink, el CEO de BlackRock. El mayor fondo de inversión global en el mundo fue fundado en 1988 y tiene una importante presencia en la economía argentina: tiene entre sus activos títulos de deuda de Argentina, acciones de empresas clave como Mercado Libre, Tenaris, Grupo Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro, entre otras, casi 10 millones de acciones de YPF, que convertirían al fondo en el principal accionista privado de la petrolera bajo control estatal (1,7% del total). También sería el principal accionista minoritario en Edenor, Telecom y de Central Puerto, y el segundo de Transportadora del Gas del Sur, mientras que tendría participación relevante Pampa Energía, Loma Negra o IRSA.

² Milei tiene relación con el think tank Red Atlas o Atlas Network que lo conecta con figuras como la de Trump, Bolsonaro, Johnson, Liz Truss y Suanz. Esta institución con desplegada presencia a nivel internacional se nutre mayormente de dinero no declarado y es el canal de influencia política de los multimillonarios del mundo.

quienes pisan fuerte en el sector petrolero y minero. Tampoco es inocuo el impacto en el terreno de la geopolítica considerando la importancia que la energía tiene en este momento en los conflictos internacionales.

Lo anterior también se refleja en la ausencia de representación del agronegocio en la composición del actual gabinete que, con excepción de la titular de la AFIP llegada desde el Grupo Cargill, tiene una marcada presencia de actores del mundo financiero, petrolero y de los grandes grupos locales, resaltándose la estrecha relación con Paolo Rocca (Techint), Eduardo Eurnekián (Corporación América), Eduardo Elsztain (IRSA), entre otros.

La dolarización no contiene los intereses del bloque tradicional, tampoco los de los grupos económicos locales ni de las instituciones globales del capital financiero, especialmente el FMI y el Banco Mundial. El fondo, de hecho, en su último *Staff Report* (junio 2024) recomendó a la Argentina bajar los niveles de inflación sin pagar los costos de la dolarización. El ejemplo puesto por el organismo fue la trayectoria seguida por Perú durante la última década que sostiene un esquema de unificación y flotación administrada del esquema cambiario en el marco de la competencia de monedas.

El FMI se encuentra especialmente conforme con la velocidad que asumió el ajuste fiscal del gobierno Milei sin poner en peligro la gobernabilidad política. Pero los señalamientos no son menores y podemos simplificarlos en una clara demanda por devaluar la moneda local. En concreto, por un lado, el reporte indica que la política monetaria debe asumir un rol más activo para combatir la inflación lo cual implica que las tasas de interés deben volverse positivas en términos reales. Por otra parte, las recomendaciones sugieren que la política cambiaria debe volverse más flexible a medida que se alivian las restricciones cambiarias. No se trata de una salida brusca del cepo (a lo Prat Gay) sino de una flexibilización administrada para cuidar la cobertura de reservas. Pero sencillamente, el horizonte que más temprano que tarde promueve el organismo internacional es la eliminación de las prácticas de múltiples tipos de cambio y restricciones cambiarias.

Aunque, debe advertirse que si bien la dolarización no parece atractiva para el grueso del PEL, lo cierto es que existen intereses concretos de inversores privados ligados al negocio financiero (vinculados al mundo Caputo-Bausili) que vienen realizando rentas en pesos y la conversión a moneda dura requiere de un tipo de cambio apreciado.

Este panorama, paradójicamente, coloca al gobierno enfrentado a parte del bloque de poder económico que lo sostiene, en nombre de una “racionalidad” que está por encima de los intereses de las clases y los sectores que el mismo gobierno representa. Una contradicción que lo obliga a ejercer el poder del mismo Estado que quiere destruir, para disciplinar a los sectores del capital a favor de los cuales viene haciendo el trabajo sucio (ajuste de los ingresos, salarios y recorte de beneficios sociales).

Lo cierto es que el gobierno tiene que aplicar una racionalidad diferente a la que le impone el propio bloque de poder con el que comparte una visión de clase. Una nueva devaluación con una espiral inflacionaria, si bien recompondría a corto plazo la rentabilidad de los exportadores y permitiría mejorar la acumulación de reservas en el BCRA para satisfacer las demandas de los acreedores externos, comprometería las elecciones de medio término del año que viene. Sin embargo, parece difícil que la inestabilidad financiera no se termine imponiendo por fuera de la voluntad de los planes de gobierno. En todo caso será un forcejeo que desnudará la debilidad del gobierno o su capacidad de disciplinar a las fracciones del capital que se ven afectadas por esta estrategia.

Una alternativa fuera de la agenda dominante: Un programa popular antiinflacionario

El momento actual nos plantea una encerrona entre la dolarización endógena y el ajuste inflacionario, un falso debate que propone dos estrategias destinadas a profundizar el malestar social consolidando esquemas de negocios distintos pero que comparten un elemento común: la postergación del salario, de los ingresos de la población, del empleo y de las unidades económicas de menor tamaño.

Si la verdadera y genuina preocupación del gobierno es la inflación, las alternativas para abordar el tema es más amplia que la acotada perspectiva que nos ofrece el Gobierno y el PEL.

Primero debe considerarse que la inflación es principalmente un fenómeno político (o de la economía política), y bastante poco comprensible desde los enfoque macroeconómicos que hacen abstracción de los efectos que plantea sobre el funcionamiento de la economía la discusión social sobre la distribución de los ingresos y la riqueza. En este sentido, la inflación tiene que ver con una disputa en la sociedad donde el Estado no logra ordenar el sistema de precios, de manera tal de garantizar por consenso o coerción una determinada pauta de distribución de los ingresos y la riqueza. Es en ese plano que hay que ubicar lo que se expresa en el esquema fiscal y en la emisión de moneda. Por eso, un abordaje integral de la cuestión inflacionaria consiste en poder instaurar un orden en el sistema de precios.

El orden de precios relativos que establece la dolarización endógena y el ajuste inflacionario supone que los precios de los alimentos y la energía deben alinearse con los precios internacionales. Lo mismo ocurre con varios insumos de uso difundido (como el aluminio y el acero) así como con las tarifas y parte de la infraestructura que deriva inevitablemente en un menor poder adquisitivo, en un achicamiento del mercado interno y un aumento en los costos de producción. Esto conduce a precios relativos compatibles con una salida extractivista y un fuerte proceso de desindustrialización. No obstante, la diferencia entre la salida inflacionaria y la dolarización endógena radica en la protección de ciertos oligopolios locales, que podrían sucumbir ante la competencia externa en un contexto de dolarización.

La estrategia antiinflacionaria que necesita Argentina debe combinar alimentos y energía a precios accesibles, tarifas e infraestructura basadas en sus costos de producción. De esta manera, se incrementa el poder adquisitivo, se amplía el mercado interno de base popular y se reducen los costos para la producción local. Por lo tanto, es fundamental frenar el extractivismo y financiar, mediante la reapropiación pública de las rentas asociadas a una explotación sustentable de los recursos naturales o bienes comunes, el desarrollo de una estrategia productiva compatible con el bienestar de la comunidad.

Este camino exige articular el enfoque macroeconómico con cambios estructurales imprescindibles entre los que se destaca la revisión de la deuda pública y la cancelación del acuerdo con el FMI. Asimismo, exige de la implementación de estrategias de regulación pública que disciplinen el comportamiento de la trama del poder asociada al endeudamiento. La lógica que el capital ha impuesto en el marco de la apertura financiera y su resultado, la deuda, se expresa en términos de consolidación de un componente de valorización financiera relevante constitutivo de la acumulación de capital. Proceso este que debilita la inversión productiva y que es acompañado por estrategias especulativas en el campo fiscal y en el balance de divisas. La resistencia a todo intento de tributación progresiva, la demanda de subsidios para consolidar

posiciones dominantes, el componente especulativo en el terreno de la fijación de los precios en los mercados oligopólicos y el permanente proceso de fuga capitales, son expresiones concretas de este fenómeno. Esto debilita las cuentas públicas, promueve el endeudamiento, el déficit en materia de divisas y las presiones inflacionarias.

En este sentido, una clave principal para imponer un nuevo esquema de precios relativos es controlar el tipo de cambio y, por ende, la oferta de divisas de la economía argentina. Esto se relaciona con la necesidad de terminar con la regulación vigente en materia de comercio exterior el cual siguen funcionando bajo declaración jurada de las empresas. También obliga a una profunda rediscusión respecto al sistema financiero y su papel como canal para la fuga de capitales. En este marco, y sobre la base de un cambio en el esquema fiscal que fortalezca el equilibrio de las cuentas públicas mediante la imposición sobre las grandes rentas y patrimonios de las unidades económicas y las personas físicas, y ordenando el sistema de subsidios con criterios de equidad, se necesitan otras políticas adicionales como las que se detallan a continuación.

La propuesta para un abordaje integral de carácter antiinflacionario debe combinar varios instrumentos con el objetivo de lograr un sistema de precios más justo y fomentar el desarrollo productivo.

1. Desacoplamiento de Precios: Implementar retenciones y otros mecanismos para diferenciar los precios internos de los internacionales en alimentos y energía, especialmente en commodities agropecuarias y en insumos estratégicos como el acero.
2. Control Social Comunitario: Organizar la participación comunitaria en la formación de precios, enfocándose en cadenas de producción estratégicas como alimentos, energía y otros insumos. Esto implica la colaboración entre el Estado, trabajadores, pymes, cooperativas y empresarios para limitar la capacidad de fijación de precios y evitar la apropiación excesiva del excedente por parte de actores dominantes.
3. Congelamiento General de Precios: Implementar un congelamiento de precios por un período limitado, acompañado de una redistribución progresiva de ingresos. La salida de este congelamiento debe ser administrada utilizando la organización de mesas sectoriales por cadena de producción.
4. Intervención Estatal: Utilizar las herramientas legales existentes, como la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Abastecimiento, para evitar comportamientos especulativos. Además, el Estado puede participar directamente en ciertos mercados estratégicos mediante la provisión de bienes y servicios.
5. Acuerdo Social para la Producción: Crear mesas de concertación y control por cadena de valor, con representantes de empresarios, trabajadores y consumidores, bajo la mediación del Estado. Estas mesas se centrarían en bienes esenciales y en insumos estratégicos para la producción, estableciendo criterios conjuntos para la distribución de la productividad y el sistema de precios.

El objetivo de esta estrategia es establecer un orden con una distribución progresiva de los ingresos, ampliar el mercado interno, desarrollar economías regionales, agregar valor, incorporar progreso técnico y ahorrar divisas. Para ello, se precisa la conformación de un esquema de precios con tarifas de energía más bajas, salarios reales más altos, alimentos asequibles y tasas de interés más bajas, promoviendo así el desarrollo industrial y combatiendo la inflación.

